



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D. C., cuatro (4) de junio de dos mil diecinueve (2019)

RADICADO:	11001-33-35-026-2019-00185-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	OSCAR GERMÁN MONTOYA DUQUE
DEMANDADO:	NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL - CASUR

OSCAR GERMÁN MONTOYA DUQUE, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra de la **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL - CASUR**, con el objeto de obtener la nulidad de los oficios No. S-2018-050081/ANOPA-GRULI-1.10 de 19 de septiembre de 2019 y E-01524-201817280-CAsur Id: 352617 de 28 de agosto de 2018, por medio de los cuales niega el reconocimiento y reajuste de la asignación de retiro.

A través de providencia de fecha 13 de mayo de 2019¹, se formularon observaciones a la demanda presentada, como consecuencia de las falencias encontradas relacionadas con los presupuestos procesales de admisibilidad, en cumplimiento a lo ordenado en el art. 162 del CPACA., las cuales fueron: *i) estimación razonada de la cuantía*.

En virtud de lo anterior, el Despacho concedió el término de diez (10) días de conformidad con lo estipulado en el artículo 170 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que se subsanara el defecto señalado, so pena de rechazo.

Esta providencia fue notificada a las partes por estado 14 de mayo de 2019, tal y como se verifica a folio 52 del plenario y, el estado ordinario fijado en las carteleras de la página web de la Rama Judicial dispuestas para tal fin.

La apoderada judicial de la parte actora, mediante memorial radicado el 28 de mayo de 2019², allegó dentro del término legal escrito de subsanación de la demanda, en

¹ Folios 51-52

² Folios 53-55

cumplimiento a lo señalado en proveído de data 13 de mayo de la presente anualidad.

Analizada la integridad de la demanda, y su respectiva subsanación, se observa que en torno al presupuesto procesal del juez competente, no es posible avocar el conocimiento del medio de control, de conformidad con las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. De la estimación razonada de la cuantía

El artículo 155 de la ley 1437 de 2011, señala los asuntos sobre los cuales tienen competencia los Juzgados Administrativos en primera instancia, refiriéndose en el numeral 2º específicamente a los de carácter laboral, preceptuando lo siguiente:

“Artículo 155. Competencia de los jueces administrativos en primera instancia. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
(...)

Subraya fuera de texto

Adicionalmente al definir nuestro legislador la competencia en razón de la cuantía determinó unas condiciones especiales para su fijación, en efecto establece la norma:

“Artículo 157. Competencia por razón de la cuantía. Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.

Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.

En las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.”

Pues bien, el apoderado de la parte actora, al realizar los planteamientos en torno a la fijación de la cuantía dentro del escrito de subsanación de la demanda, determinó lo siguiente³:

“Estimo razonadamente la cuantía en \$49.454.651.84 tomando en cuenta que es el valor estimado de los dineros dejados de pagar de mesadas a mi poderdante durante los tres años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, que se pueden reclamar, sin aplicar aún los intereses de mora, los perjuicios y sin aplicarse la diferencia porcentual de la asignación de retiro que percibe actualmente y la que debería recibir una vez se re liquide desde el año 1997, como se demuestra en el libelo de la demanda a todas las demás prestaciones, primas y demás factores que constituyen salario y que fueron menoscabados desde el salario básico afectado de 1997.

(...)

*Por estas razones señor Juez que, Para (sic) efectos del pago de las mesadas dejadas de pagar en el último cuatrienio, se pretende el pago de la suma de **\$49.454.651.84** a razón de 14 mesadas año, de acuerdo con lo establecido en la Sentencia No. 1498 de 2012, del Honorable Consejo de Estado.”*

Teniendo en cuenta lo anterior, en torno a las aspiraciones económicas legítimas que fundan las pretensiones del demandante, estimadas en **\$49.454.651.84 (CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS)**, y de conformidad con los documentos soporte de dichas pretensiones, es preciso señalar que el monto indicado supera los cincuenta (50) salarios mínimos establecidos para efectos de determinar la competencia en virtud de este factor.

En este orden de ideas, **al superarse los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes** de que trata el artículo 155 del C.P.A.C.A., no es posible avocar conocimiento en el presente asunto.

Recuerda el Despacho, que mediante providencia del 20 de abril de 2015, proferida dentro del radicado 11001-03-15-000-2014-02729-01, el Consejo de Estado se pronunció en torno a la aplicación de las reglas de competencia definidas frente al presupuesto procesal de la cuantía, ratificando que es deber del juez verificar dicho elemento al momento de admitir la demanda, señalando que son aplicables de manera preferente las disposiciones jurídicas que frente a esta materia contiene el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

³ Folios 37-38 del plenario

Corolario de lo anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 152 de la Ley 1437 de 2011⁴, en virtud del factor cuantía, el competente para conocer el presente asunto es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y por ello se ordenará su remisión a la referida Corporación.

Por lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE

PRIMERO.- DECLARAR QUE ESTE JUZGADO CARECE DE COMPETENCIA para conocer del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido por **OSCAR GERMÁN MONTOYA DUQUE**, contra **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL – CASUR**.

SEGUNDO.- REMITIR el presente expediente, una vez ejecutoriado este proveído, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Reparto, por conducto de la Oficina de Apoyo, de conformidad con las consideraciones anotadas en la parte motiva.

TERCERO.- Por Secretaria déjense las constancias respectivas y dese cumplimiento a la mayor brevedad a lo aquí resuelto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez



⁴ Art. 152.- Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (...) 2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.